

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL  
SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA
DEMANDADOS	COLPENSIONES
INTERVINIENTES	MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA y LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS
PROCEDENCIA	JUZGADO DIECISIETE LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001-31-05-017-2019-00333-01
SEGUNDA INSTANCIA	CONSULTA
TEMAS Y SUBTEMAS	PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
DECISIÓN	CONFIRMA

SENTENCIA No. 251

Medellín, treinta y uno (31) de octubre de dos mil veintidós (2022)

En atención a lo previsto en el decreto 806 de 2020 convertido en legislación permanente a través de la Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA QUINTA DE DECISION LABORAL el presente asunto, según consta en Acta No. 059 de 2022, se procede a dictar sentencia en orden a surtir el grado jurisdiccional de consulta en favor de la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** y **COLPENSIONES**, respecto de la Sentencia No. 385 del 28 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín.

Atendiendo al poder que se allegó al expediente, se reconoce personería a la abogada **YESICA CANO URREGO** identificada con T.P. No. 271.800 del C.S. de la J. para que actúe como apoderada sustituta de **COLPENSIONES**.

ANTECEDENTES

La señora **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** presentó demanda en contra de **COLPENSIONES** con el fin de que: **1)** Se declare que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento del señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO**, en calidad de hija de este. **2)** En consecuencia, se condene a **COLPENSIONES** a reconocer y pagar las mesadas pensionales causadas desde el 19 de marzo de 2018. **3)** Así mismo, solicitó el pago de intereses moratorios conforme lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o la indexación de las sumas adeudadas por la entidad accionada. **4)** De otro lado, petitionó el decreto, como medida cautelar, del pago provisional de las mesadas de la pensión de sobrevivientes, en su condición de hija mayor y estudiante del fallecido, mientras se dicta sentencia que ponga fin al proceso.

Sustentó sus pretensiones en que mediante Resolución N° 11644 de 2002 el entonces ISS reconoció la pensión de vejez a su padre, señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO**, en cuantía de \$1.435.132, quien falleciera el 19 de marzo de 2018. Que, en vida, su pariente conformó un vínculo marital con su señora madre, **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**. Que vivió con sus padres, y al mismo tiempo adelantaba estudios de filosofía en la Universidad de Antioquia, por lo que dependía económicamente del pensionado, al cual asistió hasta el momento de su deceso, puesto que padecía cáncer pulmonar. Que era beneficiaria de su padre en el sistema de salud, y desde su muerte está desprotegida en este ámbito.

Que invocando la calidad de hija mayor de edad del pensionado, solicitó a **COLPENSIONES** el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, misma que le fue negada tras concluir que no satisfacía lo establecido en el inciso segundo del artículo 2° de la Ley 1574 de 2012, relativo a la carga académica; frente a lo cual expuso que, al momento de matricularse, para el primer semestre de 2018, tenía asignados 24 créditos además de otra materia de formación ciudadana, con intensidad de 2 horas semanales; mientras que para el siguiente semestre, asistía a 20 horas semanales, por lo que, al fallecimiento de su padre, acreditaba la intensidad horaria requerida.

Expuso que, la enfermedad de su familiar, al que asistía permanentemente, afectó el desarrollo de su vida cotidiana, generándole alteraciones psicológicas y emocionales como consecuencia del estrés, lo cual se vio reflejado en su desempeño, e incluso en su actividad académica, llevándola a cancelar dos (2) asignaturas en el primer periodo de 2018, quedando con un total de 18 horas semanales.

Que adelantó de manera diligente las solicitudes administrativas para la pensión de sobrevivientes, tanto que interpuso acción de tutela en contra de la administradora de pensiones, la que fuere conocida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín, Rad. 05001-05-31-05-010-2019-00007-00, que en primera instancia falló a favor de sus intereses, decisión revocada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín.

Por último, expuso que, tanto a su madre, como a la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS**, se les negó el pago de la pensión de sobrevivientes reclamadas por ambas en calidad de compañeras permanentes del causante (f. 1 a 8 Archivo 01 ED).

### **POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS**

La demandada **COLPENSIONES** se opuso a la prosperidad de las pretensiones proponiendo como excepciones de mérito: “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL; IMPROCEDENCIA INTERESES MORATORIOS; PRESCRIPCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS* (...)” (f. 129 a 145 Archivo 01 ED).

Mediante Auto del 10 de mayo de 2019 el Juzgado de primera instancia ordenó integrar a la Litis a las señoras **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS** y **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, en calidad de intervinientes *Ad-Excludendum* (f. 105 a 106 Archivo 01 ED).

En tal condición, la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** presentó su respectivo escrito demandando a **COLPENSIONES** y a las **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**. Para ello, alegó que convivió con el señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO** por más de 23 años, hasta el momento de su muerte, relación de la que nacieron dos (2) hijos, **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** y **JOSÉ CAMILO GRAJALES GARCÍA**, convivencia por la cual reclamó a la administradora de pensiones demandada el pago de la pensión de sobrevivientes, negada finalmente en Resolución SUB 139676 del 24 de mayo de 2018, al considerar que no logró acreditar la convivencia, al paso que también se presentó a reclamar la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS**, suceso que dijo, la sorprendió, toda

vez que desconocía que su compañero hubiere tenido otra relación, pues señaló que el matrimonio celebrado entre este y la citada mujer era ficticio, en tanto no convivieron.

Expuso que también elevó reclamación ante **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN**, a fin de obtener de esta el reconocimiento y pago de la sustitución de la cuota parte pensional, trámite terminado con desistimiento tácito en Resolución No. 15550 del 19 de enero de 2019.

En consecuencia, solicitó: **1)** Condenar a **COLPENSIONES** y a las **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN** al pago de la sustitución pensional devenida del deceso del señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO**. **2)** Igualmente, al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexación de las sumas resultantes (f. 154 a 168 Archivo 01 ED).

A lo peticionado por la interviniente **COLPENSIONES** mostró resistencia, formulando como excepciones las de “(...) *INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES; IMPROCEDENCIA DE INTERESES MORATORIOS; PRESCRIPCIÓN e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS* (...)” (f. 220 a 226 Archivo 01 ED).

A través del Auto del 26 de marzo de 2021, el Juzgado de primer grado dispuso, entre otras cosas, no dar trámite a los pedimentos formulados por la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** en contra de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN** (f. 1 a 2 Archivo 05 ED).

De otro lado, pese a notificarse de su vinculación al proceso, la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS** no acudió a presentar escrito de intervención alguno (Archivo 08 ED). En virtud de esta última circunstancia, en audiencia del 21 de octubre de 2021, el *A quo* dispuso la continuación del proceso sin la comparecencia de la citada, teniendo en cuenta que tenía aquella hasta esa diligencia para arrimar su escrito de intervención, sin que hiciera uso de la oportunidad otorgada (Archivo 14 ED).

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia No. 385 del 28 de octubre de 2021, decidió lo siguiente:

*“(…) **Primero.** DECLARAR que a la señora **MARIA EMMA GRAJALES GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.216.725.886, le asiste derecho a que la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre **JOSE LORENZO GRAJALES ARANGO** a partir del 1 abril de 2018 conforme se indicó en la parte motiva.*

***Segundo.** CONDENAR a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, a reconocer y a pagar a la señora la señora **MARIA EMMA GRAJALES GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.216.725.886, la suma de **SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M.L.C. (\$69.221.551,00)**, por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 1° de abril de 2018 al 30 de Septiembre de 2021.*

*A partir del mes de **OCTUBRE** de 2021, **COLPENSIONES**, continuará reconociendo y pagando a la señora **MARIA EMMA GRAJALES GARCIA**, incluidas las adicionales de junio y Diciembre, una mesada equivalente a **UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L.C. (\$1.561.785,00)**, que se incrementará cada año de conformidad con el Índice de Precios al Consumidor. Mientras subsista la calidad hija estudiante.*

*Se autoriza a COLPENSIONES a que del retroactivo adeudado, se realicen los descuentos en salud a que haya lugar.*

**Tercero.** *CONDENAR, a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, como obligado a reconocer y pagar a la señora **MARIA EMMA GRAJALES GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.216.725.886, los intereses moratorios a partir del 7 noviembre de 2018, hasta el día del pago total y efectivo de la obligación que aquí se le impuso. Se absuelve de la indexación.*

**Cuarto.** *ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES de la totalidad de las suplicas de la demanda iniciada por la señora **MARIA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, conforme a lo expuesto en la parte motiva. (...)”.*

### **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA**

Por haber resultado la sentencia totalmente adversa a la interviniente **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, el presente asunto se estudiará en el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA en su favor, al igual que de **COLPENSIONES**, conforme lo dispone el artículo 69 del CPTSS.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada de **COLPENSIONES** presentó alegatos de conclusión dentro de la oportunidad concedida, insistiendo en que la demandante **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** no cumple las condiciones establecidas en artículo 2 de la Ley 1574 de 2012, consistentes en que el joven estudiante entre 18 y 25 años de edad, debe acreditar una intensidad académica no inferior a 20 horas semanales, para acceder a la pensión de sobrevivientes al momento en que fallece el pensionado, del cual depende económicamente, afirmando que para el caso, solo se acreditó una intensidad académica de 18 horas semanales para el semestre 2018/02.

Así mismo, citó la sentencia T-664 de 2015 en donde se plantea que, independientemente de la intensidad académica que se registre en el certificado de estudio que aporte un joven entre 18 y 25 años, la entidad encargada del pago de las mesadas debe verificar si materialmente se cumple con los requisitos legales exigidos, antes de suspender el pago de la prestación social que disfruta (Archivo 04 ED Tribunal).

### **PROBLEMA JURÍDICO**

El problema jurídico a resolver gravita en establecer si se demostró en el plenario el cumplimiento de los presupuestos legales por parte de la señora **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA**, en calidad de hija mayor estudiante, y de la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, en condición de compañera permanente, para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en razón al fallecimiento del señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO**, pensionado por vejez del extinto ISS. En caso positivo, habrá de determinarse la efectividad del derecho, y el porcentaje que le correspondería a cada una, de ser el caso.

Así mismo, se validará si hay lugar al reconocimiento y pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, o a la indexación de las sumas a reconocer, verificándose igualmente si operó el fenómeno prescriptivo frente a la acción incoada.

Se procede entonces a resolver tales planteamientos previos las siguientes,

### **CONSIDERACIONES**

Se destaca que no es materia de debate dentro del presente asunto:

- (i) Que mediante Resolución No. 11644 del 01 de agosto de 2002, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció al señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO** la pensión de vejez, a partir del 7 de abril de 2002, en cuantía de \$689.660. (f. 178 a 180 Archivo 01 ED).
- (ii) Que de la pareja conformada por el señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO** y la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, procrearon a la demandante, **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA**, nacida el 21 de marzo de 1998 (f. 54 a 55 Archivo 01 ED).
- (iii) Que el 13 de septiembre de 2017 el señor **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO** y la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS** contrajeron matrimonio civil ante la Notaría Novena del Círculo de Medellín (f. 46 a 47 Archivo 03 ED).
- (iv) Que el pensionado en mención, falleció el 19 de marzo de 2018 (f. 16 a 17 Archivo 01 ED).
- (v) Que tanto la joven **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA**, como la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, en calidad de hija y compañera permanente del causante, respectivamente, solicitaron a **COLPENSIONES** el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, petición despachada de manera negativa en Resoluciones SUB 137646 del 24 de mayo de 2018, SUB 1666261 del 23 de junio de 2018, SUB 270122 del 16 de octubre de 2018, SUB 303744 del 21 de noviembre de 2018, confirmada esta última en la Resolución DIR 20875 del 30 de noviembre de 2018 (Archivo 03 ED)

### **PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES**

Sea lo primero recordar que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad menguar las consecuencias económicas que se generaran en el núcleo familiar por la intempestiva muerte de uno de sus miembros, afiliado o pensionado al Sistema General de Pensiones, que contribuye de manera sustancial al mantenimiento de dicho grupo familiar. Esto con el fin de paliar el cambio abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados como beneficiarios de esta protección por la propia ley de seguridad social (SL1921-2019).

En ese sentido, ha señalado la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en las sentencias SL9762-2016, SL 9763-2016, SL 1689-2017, SL 1090-2017, SL 2147-2017 y SL3769-2018, entre otras, que la norma que gobierna el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes es la vigente al momento del óbito del pensionado o afiliado, de modo que la disposición legal aplicable al caso que nos ocupa es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 con la modificación introducida por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, por encontrarse vigente para el **19 de marzo de 2018** (f. 16 a 17 Archivo 01 ED), fecha del fallecimiento del señor José Lorenzo Grajales Arango.

Ahora bien, es relevante anotar que, como el *de cujus* se encontraba pensionado para la época del siniestro, no se hace necesario ahondar si dejó o no causado el derecho pensional reclamado, por cuanto nos encontramos de cara a una sustitución pensional. De allí que la controversia judicial se limite a verificar si **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** y **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, hija y compañera permanente del causante, cumplen con los presupuestos normativos para tenerlas como beneficiarias de la pensión que deprecen.

La referida norma dispone, en lo que interesa a las pretensiones de la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, que serán beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, la cónyuge o la compañera permanente, siempre y cuando acrediten que estuvieron haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haber convivido con este no menos de cinco (5) años con anterioridad a su muerte.

Frente a tal requisito, ha sido pacífica la jurisprudencia del alto tribunal en materia laboral en señalar que, en tratándose de compañeros permanentes, la convivencia debe corroborarse dentro de los cinco (5) años inmediatamente anteriores al deceso del causante. A guisa de ejemplo, se rememora lo expuesto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL1399-2018, en la que manifestó que:

*“(…) De acuerdo con lo anterior, la convivencia de los compañeros permanentes debe constatarse en los 5 años previos al fallecimiento del pensionado o afiliado, puesto que, a diferencia del vínculo matrimonial, cuyas obligaciones personales no se agotan por la separación de facto, en tratándose de las uniones maritales de hecho, la cesación de la comunidad de vida tiene un efecto conclusivo de la unión y de sus obligaciones y deberes personales, y por ende el compañero deja de pertenecer al grupo familiar (…)”.*

Esgrimido lo anterior, y atendiendo a que la razón de la negativa pensional radicó, según lo expuesto en los múltiples actos administrativos obrantes en el plenario (Archivo 03 ED), en que no se acreditó la convivencia con el causante durante el término exigido, la Sala abocará el estudio del caudal probatorio arrimado, con la finalidad de verificar si la vinculada demostró tal exigencia, o, por el contrario, le asiste razón al *A quo* al concluir que no está probado el supuesto en comento.

Con ese propósito, se observa que la demandante aportó formato de “*actualización de información personal jubilado*” de las EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN – EPM, diligenciado el **31 de marzo de 1999**, en el cual el desaparecido **JOSÉ LORENZO GRAJALES ARANGO**, registró a la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** como su compañera permanente, con quien, precisó en el mismo documento, convivía desde el 15 de mayo de 1996. Así mismo, en dicho formato incluyó la información de los hijos de ambos, **JOSÉ CAMILO GRAJALES GARCÍA**, y la demandante **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** (f. 189 Archivo 01 ED).

En el curso de la primera instancia se escuchó a la Litisconsorte, señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, en interrogatorio de parte (Min 13:39 a 34:08 Archivo 14 ED), quien en una exposición confusa y desordenada sobre su convivencia con el causante expuso: que convivió con aquel desde 1995 hasta 2019 (sic). Explicó que entre el 2000 y 2007 laboró como empleada doméstica por días, y que el fallecido no la afilió a seguridad social como su beneficiaria, en razón a la demencia que presentaba, que lo hacía más rebelde, sumado a los celos que sentía, pero aseguró compartir todo el tiempo en la casa.

Al ser indagada sobre los lugares en que se desplegó esa convivencia, indicó que en 1995 vivieron en el barrio Buenos Aires, rodando luego por varias partes, trasladándose al municipio de Amagá y a Santa Elena, sitio en el que permanecieron durante el 2003 por espacio de ocho (8) meses. Que después se fueron para Medellín, específicamente al barrio La Milagrosa, lugar en el que habitaron hasta el año 2012, para posteriormente ubicarse en la calle 67C carrera 105-79, vivienda en la que lleva 9 años.

Adujo que en ningún momento se separó del causante, solo que como ella trabajaba de noche, entonces él se quedaba solo con sus hijos; desconoce si el pensionado inició proceso judicial para obtener el pago del incremento pensional por hijos a cargo. Negó que sus hijos hubieran permanecido bajo tutela de Bienestar Familiar, y afirma que tuvo que demandar por alimentos al señor Grajales Arango, debido a que muchas veces se quedaba en la calle y los

dejaba sin alimentación, apareciendo tiempo después, lo que atribuyó al hecho de quedarse aquel con otras mujeres.

Que el causante tuvo ocho (8) hijos con la señora **OLIVA DEL SOCORRO OSPINA**, a quien dijo no conocer, e indicó no saber las razones del porqué el pensionado antes de fallecer contrajo matrimonio con la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS**, a la que tampoco conoció.

Cuando se le indaga acerca de lo manifestado por el fallecido ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, Rad. 004-2006-00511, en cuanto a que en el año 2007 se encontraba separado de ella, no fue precisa al responder este interrogante, haciendo referencia a que ella laboraba de noche, dejando a los hijos de ambos al cuidado de aquel, empero en esa clase de situaciones, aquel optaba por dejarlos solos, reseñando incluso que en su momento se fue de paseo con otra mujer, lo que les acarreó inconvenientes con Bienestar Familiar, del que recibió llamado manifestándole que se llevarían a sus hijos debido a que “Don José” los había dejado allí, decisión a la que se opuso alegando ser la madre de aquellos, suceso que se produjo, indicó, por los mismos celos del pensionado y su arrogancia para con ella.

Continuó aseverando que vivió en Cali con el causante, ciudad en la que nació su hija **MARÍA EMMA**, empero, también dijo que durante un tiempo su compañero se fue a pasear con una hermana de él, espacio en el que dijo no haber tenido contacto con los familiares del citado, dado que este no le daba espacio para conocer a ninguno. Que el causante falleció un día domingo, y que su sepelio lo pagó EPM, empresa en la que laboró durante 31 años. Seguido aceptó que, acaecido el fallecimiento, reclamó una parte de la pensión de sobrevivientes a cargo de la citada entidad, proceso en el cual le fue informado que había con ella eran tres (3) personas en total las que estaban reclamando (Luz Dary y María Emma). Por último, precisó que el pensionado tenía una casa y una huerta que le producía café, pero en su momento tuvieron que dejarlos perder, aunado a que no han iniciado proceso de sucesión debido a que se adeuda dinero.

También se recibió interrogatorio de parte a la joven **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** (Min 35:50 a 1:02:00 Archivo 14 ED), en virtud a su condición de demandante, aclarándose que dentro de esa diligencia le fueron formuladas preguntas relativas a la relación de convivencia de sus padres, dada su obvia cercanía con estos. Así entonces en primer lugar expuso ser estudiante del programa de licenciatura en filosofía la Universidad de Antioquia, y en cuanto a la convivencia de sus padres comenzó por exponer que un día su papá le presentó a la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS**, con quien contrajo nupcias su progenitor, hecho del que dijo haberse enterado tiempo después de ocurrido el matrimonio. Que en ese momento el pensionado le manifestó que quería apoyar a la citada mujer, por tratarse de una persona joven, siendo su deseo que ella lo cuidara en la vejez, casándose, según recordó, en el mes de noviembre de 2017.

Que si bien antes vivía con su mamá y su hermano en el municipio de Marinilla – Antioquia, sitio en el que la vinculada laboraba, para después, en el año 2013, tanto la ella (María Emma) y su hermano decidieron irse a vivir con su padre, permaneciendo con este hasta el momento de su deceso.

Al ser indagada sobre el tiempo de convivencia entre sus padres, afirmó que ello se dio desde 1996 o 1997 hasta 2003, y pese a que intentaron convivir nuevamente entre 2010 y 2011 en el barrio la Milagrosa, solo permanecieron juntos durante 6 meses aproximadamente. Aclaró que en el año 2002 fueron desplazados de La Sierra debido a la violencia vivida en esa época, yéndose con su mamá a Amagá, y después a Santa Elena, entre 2002 y 2003; agregó que permaneció con su hermano en un internado cerca de un (1) año, oportunidad en la cual aclaró, que su progenitora no los abandonó, pues de hecho quien no quería que se acercaran a ella era su padre, al decir que los maltrataba. Que justo antes de ser internados, sus padres convivieron en una cabañita en Santa Elena, ubicada en la vereda “El Mazo”, y de ahí su mamá se vino a

Medellín, mientras su papá se quedó en la finca, y ellos en el internado.

Anotó que su hermano y ella estuvieron conviviendo de forma intermitente con su papá y su mamá separadamente, rememorando que ella se fue a vivir con la vinculada a la Litis en el barrio Boston, y el hermano, con su padre en la Milagrosa, tiempo en el que pese a estar separados, sus ascendientes conservaban una relación muy cordial, ceñida estrictamente a lo requerido por sus hijos, y que dejaron de convivir definitivamente entre 2011 y 2018. De hecho, añadió que hubo un tiempo en el que ambos hermanos se fueron a vivir con el señor José Lorenzo, permaneciendo con este hasta el momento de su deceso. Que tanto el fallecido como su mamá tuvieron amistades, pero ninguno se unió con nadie más.

Explicó que su padre permaneció hospitalizado del 1° al 19 de marzo, periodo en el que las señoras **GARCÍA LOAIZA** y **RINCÓN GRIMALDOS** colaboraron con su cuidado. De otro lado informó que, una vez fallecido su papá, su mamá se fue a vivir con ellos. De aquella expresó que, para el momento del deceso de su padre, cuidaba una señora adulta mayor, lo que en ocasiones le implicaba pernoctar en la casa donde laboraba, hasta que la citada falleció, pues partir de allí quedó desempleada. Que desde hacía 4 o 5 años venía laborando en casas y se quedaba a dormir en estas, pues su trabajo siempre fue cuidando adultos y niños, resaltando que en esa última ocasión cuidaba a la señora en el mismo periodo en que su padre estuvo internado en la clínica.

Que la relación entre sus padres fue cordial, manifestando que decidieron separarse por el bien de todos, y en adelante solo conversaban cuando se encontraban, o por vía telefónica. Más adelante, la actora fue requerida para que respondiera si la separación de sus progenitores obedeció al trabajo de su madre, a lo que respondió sin titubeos que no fue por ello, y que, incluso, al fallecido no le agradaba mucho que ella acudiera a visitarlos.

En suma se desprende de esta versión, que la integrada a la litis y el causante finiquitaron su convivencia en el año 2011, situación que permaneció así hasta el fallecimiento del causante, acaecido en el año 2018, periodo durante el cual sostuvieron una relación cordial por el trato con sus hijos, los que durante un tiempo permanecieron uno con cada uno de sus progenitores; que al final de los días del causante, por su estado de salud, la vinculada a la litis, señora **GARCIA LOAIZA** colaboró con su cuidado, en el espacio que le permitía su actividad laboral como cuidadora de una persona mayor, mas como un gesto de solidaridad con el padre de sus hijos, que por razón de un vínculo marital de hecho que había finiquitado tiempo atrás.

Acto seguido, se escucharon los testimonios de **JOSÉ CAMILO GRAJALES GARCÍA** (Min 1:04:30 a 1:34:50 Archivo 14 ED) y **LUZ MARY QUINTERO MARÍN** (Min 1:36:00 a 2:02:35 Archivo 14 ED). El primero, hermano de la demandante, e hijo de la Litis y el causante, arguyó que conoció a la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS** con posterioridad al deceso de su padre, precisamente cuando estaba visitando el sitio donde reposan los restos mortales de su ascendiente, y de la que supo, se casó con el causante.

Que siempre vivió con su mamá y su papá hasta el fallecimiento de este último, anotando que la vinculada trabajó interna en casas de familia, cumpliendo turnos. Que, debido al trabajo de ella, a que su papá también salía a hacer vueltas, y a que él también trabajaba, indicó el testigo, nadie permanecía en la casa.

Que vivió con su familia en el barrio La Milagrosa; en Marinilla entre 2015 y 2016, lugar este en el que solo vivieron el testigo, con su hermana y su mamá, toda vez que debido a los quebrantos de salud de su padre (diabetes, hipertensión y problemas del corazón), este debía permanecer en la ciudad. Entre 2002 y 2003, afirmó que vivieron en Buenos Aires, y también en una cabaña en Santa Elena, al paso que aceptó que junto a su hermana permanecieron un tiempo en un internado, sin anotar las razones para haber estado allí, aunque expuso que sus padres los recogieron para irse a vivir juntos. Aseguró que de 2011 a 2018 han vivido en el barrio Robledo, aunque al indagársele por el periodo que permanecieron en Marinilla, afirmó



no recordarlo bien, y a pesar de lo señalado atrás, anotó que su vivencia en ese municipio pudo ser antes de llegar al barrio Robledo.

Explicó que en algún momento él vivió con su mamá, y su hermana junto a su padre, situación anterior a cuando estuvieron domiciliados en Marinilla, lo que atribuyó a cuestiones de trabajo o residencia (2007 a 2008). Luego, al preguntársele si tenía interés en que le fuese otorgada la pensión a su señora madre, manifestó que por ser responsable, trabajadora y estudiosa eso sería lo ideal para que no se mate tanto, y pueda vivir sin problemas.

Más adelante, al ser confrontado con lo manifestado por su hermana, el declarante expuso que no tenía conocimiento de las razones para la diferencia entre sus versiones, aunque aceptó que fueron desplazados entre los años 1999 y 2000, que su hermana es estudiante universitaria. De otro lado, al ponérsele de presente la declaración de su padre en punto a la separación de su madre, la señora **GARCÍA LOAIZA**, simplemente expuso que eso era normal como en toda pareja; y sobre la separación precisó que, los padres a veces hacen cosas de las que no se enteran los hijos. Que su papá no tuvo desequilibrios mentales, sino problemas de salud que lo hacían pensar cosas que no eran, indicando que en el tiempo en que estuvo hospitalizado, todos lo cuidaban, incluso su hermana, que debió cancelar varios cursos para dedicarse a su cuidado, y tiempo después supo que también la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS** acudía a acompañarlo.

Detalló el apartamento donde vivían, del que dijo, se lo dieron a su padre en 2010 como desplazado. Adujo que entre 2011 y 2018 cuando salía de trabajar, los fines de semana, su madre se iba para la casa, y que, si bien tenía discusiones con su padre, estas no eran extremas. Por último, expuso que ninguno de sus progenitores abandonó el hogar, agregando que los gastos del grupo familiar los asumían entre sus padres y él, mientras que Emma estudiaba, corriendo su manutención por cuenta de su padre, y después del deceso de aquel, llevan la obligación de la familia de manera compartida con la interviniente en el proceso.

Por su parte, la testigo **LUZ MARY QUINTERO MARÍN**, aceptó conocer a la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** desde hace 10 años atrás, en razón a que vive en el barrio Boston, sitio al que dijo, la citada acudía a vender ropa en el parque, actividad que desarrollada cada 8 días. Que cuando la conoció vivía en el barrio Pajarito (Robledo), donde la visitó en los años 2014 (cada 1 o 2 meses), 2016 (3 veces) y una vez en el 2018, describiendo aquel lugar en el que vivía con sus 2 hijos y esposo, llamado José Grajales, del que dijo, era pensionado. Que siempre vivieron en ese lugar, desconociendo si la mencionada vivió en otros sitios, o si desarrolló la convivencia con el pensionado en distintos sitios.

Que conoció al causante porque ella se lo presentó, y que las veces en las que fue a su casa aquel siempre estaba ahí, sin saber si llegaron a separarse, como tampoco por cuenta de quién su conocida aparecía afiliada al sistema de salud. Que cree que la causa del deceso del causante fue por diabetes, y que imagina que murió en la clínica, hechos que relató le contó la propia reclamante, a lo cual agregó que esta le contó que laboraba en casas de familia, a veces como interna. Refirió imaginar que la casa donde vivían era propia, y que el causante era quien pagaba todo lo del hogar, porque al ser pensionado, dijo, era el de la plata, pues no sabía que los hijos trabajaran, aunque alguna vez la señora **GARCÍA LOAIZA** le dijo que el hijo mayor lo hacía.

Que sabe que los compañeros convivieron hasta la muerte del pensionado, pues eso le era comentado por su conocida, y en ocasiones los vio juntos, aunque señaló saber porque hablaba mucho por teléfono con aquella.

Vista la remembranza probatoria que antecede, de entrada, debe anotarse que, para la Sala, la testimonial referenciada es insuficiente de cara a encontrar acreditada la convivencia de la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** con el *de cujus*, durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento del pensionado.

Lo anterior, como quiera que el contraste de los relatos brindados por **JOSÉ CAMILO GRAJALES GARCÍA** y **LUZ MARY QUINTERO MARÍN**, así como lo expresado por la demandante **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA**, dejan en evidencia serias contradicciones en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la relación entre los compañeros permanentes, pues, de un lado, la demandante **MARIA EMMA GRAJALES** aseguró que sus padres convivieron entre 1996 y 2003, tiempo en el que decidieron separarse, para después realizar otro intento de vivir juntos entre 2010-2011, unión que solo duró, según relató, de 6 a 7 meses. Que junto a su hermano vivieron con su madre hasta el año 2013 en Marinilla, ya que luego pasaron a residir con su señor padre, quien después de 2011, mantuvo una relación simplemente cordial con su progenitora, sin convivencia, tanto que el causante en 2017 le presentó a la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS**, con quien contrajo nupcias, motivado en el interés de ayudarla y que ella fuese quien lo acompañara en la vejez.

En contraposición a lo dicho por la anterior testigo, aparece la narración **JOSÉ CAMILO GRAJALES GARCÍA**, quien, durante toda su intervención, expresó que siempre vivió en compañía de sus padres y hermana, siendo desplazados por la violencia en 1999-2000, asentándose por temporadas en los barrios Buenos Aires, la Milagrosa, y en Marinilla entre 2015-2016, aunque después manifestó que su lugar de residencia entre 2011 y 2018 fue el barrio Robledo. De otro lado aseveró que, durante el tiempo que vivieron en los citados pueblos, el causante no pudo convivir con ellos, debido a sus padecimientos de salud que lo obligaban a permanecer en la ciudad, contradiciendo en cierta medida lo señalado por su señora madre **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, la cual, dentro de su interrogatorio, aceptó que en el año 2007 el pensionado decidió irse, según dijo, de paseo con otra mujer, llevándola al extremo de tener que demandarlo por alimentos. De igual forma, estas versiones se encuentran en lo relativo a la falta de afiliación de la Litis al sistema de salud por cuenta del pensionado, pues mientras la citada expuso que ello se debió a los celos y problemas mentales de su compañero, el testigo adujo que esto acaeció en razón a que su señora madre estuvo afiliada a salud por cuenta de los distintos empleadores para los que trabajaba.

Luego, el declarante se contradijo férreamente al precisar el tiempo en el que la familia convivió unida en el municipio de Marinilla, pues en principio indicó que fue entre 2015-2016, para después señalar que de 2011 a 2018 la convivencia se dio en el barrio Robledo (Medellín), aspecto que también confronta el relato de su hermana, misma que señaló que en 2013 ambos dejaron a su madre en Marinilla para vivir con su padre en Medellín.

De otro lado, la testigo **LUZ MARY QUINTERO MARÍN**, a decir verdad, poco o nada aporta en orden a resolver el conflicto, dado que la mayoría de situaciones que expuso las conoció, conforme explicó, por manifestaciones que le hiciera la misma señora **GARCÍA LOAIZA**, y pese a relatar que existía cierta cercanía con ella, lo cierto es que la misma se desvanece al escudriñar en su declaración, como quiera que muchas de sus respuestas las expone desde un escenario subjetivo, mencionando a lo largo de su deponencia “creer”, o que, “a su parecer”, esa era la forma en la que se daban las circunstancias de hecho, teniéndose, entonces, como una testigo indirecta o de oídas, como quiera que, además de manifestar que conocía a la demandante con una antigüedad de 10 años, su declaración siempre se direccionó a que manifestar que durante todo el tiempo la litis convivió bajo el mismo techo con su compañero e hijos, desconociendo detalles sobre donde se dio dicha convivencia, los distintos lugares como en el Municipio de Marinilla, en donde, por ejemplo, **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** expresó que había vivido hasta el año 2013, y **JOSÉ CAMILO GRAJALES GARCÍA** explicó que fue de 2015 a 2016.

Es así como las falencias anotadas ponen en entredicho entonces que al momento del deceso del citado pensionado, la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** se encontraba conviviendo con él, situación que se robustece con el contenido de la documental visible a folios 46 a 47 y 165 Archivo 03 ED contentiva de la escritura pública a través de la

cual se protocolizó el matrimonio celebrado entre el causante y la señora **LUZ DARY RINCÓN GRIMALDOS**, acaecido el **13 de septiembre de 2017**, así como el certificado de afiliación a la EPS SURA de los beneficiarios en salud del causante, en el que se detallan como tales a la citada en calidad de cónyuge y a su hija **MARÍA EMMA** (f. 89 a 90 Archivo 03 ED).

En igual sentido nótese que, por ejemplo, dentro del trámite de pensión ante el ISS agotado en el año 2002, en el formato de declaración de beneficiarios, el causante precisó “(...) **Vivo solo pero tengo 2 hijos menores a mi cargo** (...)” (f. 243 Archivo 03 ED), situación que años después fue objeto de reiteración por parte de este, justamente en diligencia de interrogatorio rendido en el año 2007, conforme lo reseñó el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín dentro de la Sentencia dictada en el proceso Rad. 004-2006-00511 promovido por el señor Grajales Arango en contra del ISS, momento en el que expuso que: “(...) *vive con sus dos hijos Camilo y Emma, desde que nacieron, velando por todas las necesidades de ello, que muy poco ha estado separado de ellos, que la mamá trató de ocultárselos, que estuvo separado de ellos por cuatro meses, esto fue de abril del año 2004 a junio de 2004, desde esa fecha los hijos han vivido con él y no han tenido más separaciones, siempre los ha sostenido económicamente, que en los últimos 12 meses estuvo separado de ellos unos días cuando viajó a Cali, y cuando Bienestar Familiar le dio la oportunidad a la mamá de ellos estar un año con ellos, y siempre estuvo él pendiente de ellos económicamente, con compañía y afecto. Que entre los años 2002 y el día de hoy la señora María del Carmen García, madre de los hijos, nunca le ha colaborado con el sostenimiento de ellos* (...)” (f. 197 a 204 Archivo 03 ED).

De ahí que, analizados en conjunto los elementos demostrativos traídos al proceso, y de acuerdo al fuero de valoración probatoria (Arts. 60 a 61 CPLSS), emerge que, en lo referente a la señora **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA**, el despliegue probatorio desarrollado en autos para sustentar la procedencia de su derecho falla en su objetivo, pues pese a que sostuvo un periodo de convivencia con el fallecido, no hay elementos de juicio que permitan establecer con la **suficiente claridad** que al momento de su muerte, y durante los cinco (5) años inmediatamente anteriores al óbito, se hubiese mantenido esa convivencia en los términos exigidos por la legislación y la Jurisprudencia.

De hecho, las pruebas evocadas no muestran ni siquiera con contundencia que la demandante hubiere pasado el periodo descrito al menos en la misma ciudad, pues no es del todo diáfano si estuvo en Marinilla – Antioquia o Medellín, y al mismo tiempo, si la separación en realidad se dio por cuestiones de trabajo, ya que, mientras una parte de la prueba se esmera en reforzar esta idea, el restante alega el rompimiento de la unión marital de mucho tiempo atrás, idea que concuerda en mayor medida con la información contenida en el expediente administrativo del pensionado, y con el hecho de haber contraído nupcias con otra persona distinta en el mes de septiembre de 2017.

Así las cosas, debe recordarse que quien concurre a la jurisdicción para que se le declare un derecho y se imponga una condena, o aquel que pretende enervar dicha pretensión, sabe que la decisión judicial debe estar fundada en pruebas regular y oportunamente vertidas al proceso, siendo entonces del resorte de las partes demostrar los hechos que sirven de base al derecho invocado, tal como lo prescribe el artículo 167 CGP.

Con dicha actividad probatoria lo que se busca es producir certeza o convicción en el operador judicial para decidir, por lo que la facultad que tienen los sujetos procesales de demostrar los supuestos alegados radica en cabeza de quien busca obtener una sentencia favorable, aclarando que esa responsabilidad no implica una sanción para quien la soporta, pero sí que los efectos de su inobservancia le acarrearán riesgos que pueden derivar en un fallo adverso, como ocurre en el presente asunto.

Por consiguiente, no estando probado que la promotora del proceso estuvo haciendo vida marital con el causante no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte,

es dable concluir que las pretensiones de la demanda están llamadas al fracaso, tal como lo decidió el Juez de primer grado, imponiéndose la confirmación del fallo en este aspecto.

De otro lado, en cuanto a las pretensiones de **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA**, relativas a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en condición de hija del causante que, pese a ser mayor de edad, se encuentra impedida para laborar en razón de sus estudios, cuestión negada por **COLPENSIONES** en sede administrativa tras concluir el incumplimiento de la carga horaria académica, la Juez de primer grado encontró procedente acceder a esta súplica, al considerar que la citada cumplió con lo establecido en la Ley 797 de 2003, y lo relacionado con la condición de estudiante establecida en la Ley 1574 de 2012, pues si bien para el momento del deceso de su padre (marzo de 2018), la intensidad horaria de la demandante solo alcanzaba 18 horas, al tenor de la Jurisprudencia Constitucional, analizada la situación particular de la actora, concluyó que esta debió cancelar varios créditos de los que había matriculado, para destinar tiempo a fin de cuidar a su familiar. Así mismo, expuso que para los meses siguientes ya la accionante cumplía con el número de horas exigidas.

Pues bien, para desatar este escollo, huelga precisar que, conforme el Literal C del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: “(...) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes (...)” (Negrilla y Subraya de la Sala).

Precisamente, en lo que refiere la norma a la condición de estudiante, debe acudirse a lo dispuesto por la Ley 1574 de 2012, la cual establece en su artículo 2° que:

*“(...) De la condición de estudiante. Para efectos del reconocimiento de la pensión de sobreviviente en los hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes enmarcados en el artículo anterior, se deberán acreditar los siguientes requisitos:*

*Certificación expedida por el establecimiento de educación formal de preescolar, básica, media o superior, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el caso de las instituciones de educación superior y por las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas para el caso de los establecimientos de educación preescolar, básica y media, donde se cursen los respectivos estudios, en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a veinte (20) horas semanales.*

*Para el caso de los estudiantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la calidad de estudiante se demostrará con la certificación que expida la respectiva institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en donde debe indicarse la denominación del programa, la duración en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica que no puede ser inferior a 160 horas, del respectivo periodo académico, el número y la fecha del registro del programa.*

*Estas certificaciones de asistencia se deberán acreditar a la entidad correspondiente semestralmente. (...)”.*

Valga anotar que, respecto del vínculo de consanguinidad entre la demandante y el causante no existe mayor discusión, en tanto este supuesto aparece aquilatado con el respectivo registro civil de nacimiento de la primera, obrante a folios 54 a 55 Archivo 01 ED.

Ahora, respecto a la condición de estudiante de la demandante, a folios 2 a 7 Archivo 15 reposan los certificados académicos emitidos por la Universidad de Antioquia a través de los cuales se constata que la joven **MARÍA EMMA GRAJALES GARCÍA** adelanta estudios

en esta institución en el programa de pregrado de *licenciatura en filosofía* en la modalidad presencial, jornada diurna, dando cuenta de la intensidad horaria en los siguientes periodos académicos:

- Semestre 2018-01 del 13 de diciembre de 2017 al 18 de junio de 2018, con asistencia de **18 horas semanales** (f. 2 Archivo 15 ED).
- Semestre 2018-02 del 21 de junio de 2018 al 27 de mayo de 2019, con asistencia de **20 horas semanales** (f. 3 Archivo 15 ED).
- Semestre 2019-01 del 13 de junio de 2019 al 14 de noviembre de 2019, con asistencia de **16 horas semanales** (f. 4 Archivo 15 ED).
- Semestre 2019-02 del 26 de noviembre de 2019 al 24 de agosto de 2020, con asistencia de **20 horas semanales** (f. 5 Archivo 15 ED).
- Semestre 2020-01 del 9 de septiembre de 2020 al 18 de febrero de 2021, con asistencia de **20 horas semanales** (f. 6 Archivo 15 ED).
- Semestre 2021-01 del 25 de febrero de 2021 al 27 de octubre de 2021, con asistencia de **20 horas semanales** (f. 7 Archivo 15 ED).

Visto lo anterior, apuntando el análisis al cumplimiento de las exigencias para el 19 de marzo de 2018, fecha del deceso del padre de la demandante (f. 16 a 17 Archivo 01 ED), encuentra la Sala que para ese momento, aquella cursaba el 2018-01 dentro del programa académico trazado por el ente universitario, cumpliendo con una carga horaria inferior la establecida en la Ley 1574 de 2012, lo que, en principio haría pensar que la reclamante no satisface el supuesto normativo evocado; sin embargo, no puede perderse de vista que, conforme los certificados traídos a colación, el pregrado adelantado por la estudiante está basado en el sistema de créditos, cuestión a la cual la disposición legal descrita ha dado un tratamiento puntual, diciendo en el parágrafo 1° del artículo 2° que: “(...) **Para efectos de los programas diseñados sobre el sistema de créditos, se tendrán en cuenta las horas de acompañamiento directo del docente y las horas no presenciales, en donde el estudiante debe realizar las prácticas o actividades necesarias para cumplir sus metas académicas, siempre y cuando estas horas hagan parte del plan de estudios y estén debidamente certificadas por la institución educativa.** (...)”.

Tal circunstancia, en efecto, fue certificada el 31 de mayo de 2018 por el Jefe de la Sección Técnica de Información del Departamento de Admisiones y Registro (f. 564 Archivo 03 ED), documento en el que señaló:

Con base en el Decreto 1295 de 2010, compilado por el Decreto 1075 de 2015, el estudiante asiste 54 horas semanales, por 16 semanas, para un total de 864 horas en el semestre. (“una (1) hora con acompañamiento directo del docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo independiente”, artículo 12)

Dicho lo anterior, es claro entonces que, para la calenda del fallecimiento del padre, la demandante acreditaba la intensidad horaria requerida de cara a hacerse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada con ese fin, cuestión que, en efecto, fue analizada de manera superficial por parte de la entidad demandada, en tanto omitió verificar en este punto el cumplimiento de los supuestos normativos aplicables a la situación particular de la actora.

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara el planteamiento de la entidad, esto es, la insatisfacción de las horas semanales requeridas, la conclusión relativa al cumplimiento de las

exigencias no sufriría cambios, pues cobraría total incidencia lo considerado por la Juez de instancia, como quiera que, a folios 59 Archivo 01 ED, la Universidad de Antioquia certificó que para el semestre 2018-01 la demandante, en principio, inscribió 24 créditos, de los cuales canceló 8, diligencia de la que da cuenta la trazabilidad de correos vista a folios 57 a 58 Archivo 01 ED, que muestra la ocurrencia de esta situación antes de la muerte de su padre, lo cual refuerza la idea acerca de que la motivación de esta disminución de carga académica, tuvo como génesis la intención de brindar un mayor acompañamiento a su progenitor, a lo cual hicieron mención **MARÍA DEL CARMEN GARCÍA LOAIZA** y **JOSÉ CAMILO GRAJALES GARCÍA**, quienes precisaron la forma como se atendía el cuidado del señor José Lorenzo Grajales, por ejemplo, durante el tiempo que estuvo internado en la clínica, y según se extrae del historial clínico de folios 18 a 56 Archivo 01 ED, que enseña el ingreso de la actora con el paciente a institución de salud con miras a recibir tratamiento por sus patologías.

De ahí que no justo, ni razonable, que como consecuencia de ese apoyo brindado por un hijo a un padre en una situación que indiscutiblemente lo amerita, y que sin duda puede trastornar el desarrollo normal y cotidiano de la vida y actividades de ese hijo, que este sea castigado por ello, tal como lo consideró la Corte Constitucional en Sentencia SU-543 de 2019 en la que dijo:

*“(…) 5.12. Así las cosas, y para concluir, la Corte advierte que corresponde a los jueces constitucionales, a efectos de definir si los hijos mayores de 18 años –menores de 25– habrán de ser beneficiarios de la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional: a) verificar que estos cumplan con las condiciones previstas en la Ley 1574 de 2012, según sea el caso, b) si lo anterior no ocurre, establecer si, en todo caso, los jóvenes están destinando tanto tiempo a sus actividades académicas que en su condición particular no cuentan con la posibilidad de trabajar, y c) solo cuando los accionantes aleguen que la suspensión de su proceso académico, para el preciso momento en que fallece su progenitor, se dio en razón de los cuidados y acompañamiento que debieron prestarle (…)”.* (Subraya y Negrilla de la Sala).

Así entonces, por una u otra vía, itera la Sala, en el particular están satisfechas las condiciones requeridas para causación de la pensión de sobrevivientes en favor de la demandante.

Ahora, observa la Sala que, para el semestre 2019-01, la Universidad certificó un total de 16 horas semanales cursadas por la demandante, cuestión frente a la cual consideró la Juez de primera instancia, no impedían la continuidad en el pago de la pensión dado que al final del periodo acreditaría más de 160 horas, lo cierto es que la Juzgadora acudió a este razonamiento en aplicación del inciso 3° del artículo 2° de la Ley 1574 de 2012, supuesto que no tiene cabida en el caso analizado, como quiera que este encuadra en programas de “*educación para el trabajo y el desarrollo humano*”, que no es precisamente del que hace parte la demandante, dado que recibe formación en educación superior o profesional.

Sin embargo, lo expuesto no da al traste con las aspiraciones de la actora, pues de la documental adosada al plenario, si bien se observa que en el programa regular de pregrado adelantado para el semestre en comento, aparecen certificadas 16 horas semanales, no puede perderse de vista que, concomitante con el *pensum* ordinario, la joven **GRAJALES GARCÍA** también hacía parte del programa multilingua de la escuela de idiomas Universidad, destinado especialmente a estudiantes de pregrado como la citada<sup>1</sup>, que, de manera complementaria, le demandaban 4 horas a la semana (f. 61 Archivo 01 ED), las cuales, sumadas a las del plan de estudios normal, arrojan un total de 20 horas académicas semanales, cumpliendo de esa manera con la intensidad de tiempo preestablecido normativamente. Siendo además que la formación en idiomas hace parte de su preparación para la vida profesional, para la que tal como lo enseñan las reglas de la experiencia, el conocimiento de una segunda lengua se viene constituyendo en un

<sup>1</sup> [www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/estudiar-udea/formacion-lengua-extranjera/programa-multilingua/informacion-general](http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/estudiar-udea/formacion-lengua-extranjera/programa-multilingua/informacion-general)

requisito para el desempeño laboral en muchos ámbitos.

Por lo anterior, no tiene reparo la Sala frente a la decisión de primera instancia de reconocer la pensión de sobrevivientes a la demandante, dado en que cumple cabalmente con las exigencias legales y jurisprudenciales del caso, convirtiéndose en acreedora a de la prestación de la cual podrá ser beneficiaria hasta que culmine sus estudios, siempre y cuando mientras ello ocurre no supere los 25 años de edad, y al mismo tiempo acredite semestralmente la condición estudiantil.

En cuanto a la **efectividad** de la prestación, es deber de la Sala recordar que el derecho por sobrevivencia se causa a partir del fallecimiento del pensionado o afiliado (Art. 46 y 47 Ley 100 de 2003 modificados por la Ley 797 de 2003), que en el caso de marras ocurrió el **18 de marzo de 2018** (f. 16 a 17 Archivo 01 ED), fecha desde la cual procedía disponer el reconocimiento de la prestación en favor de la actora. No obstante, la Juez de primer grado dispuso que la misma fuese cancelada desde el 1 de abril de 2018, aspecto que deberá mantenerse en atención a la falta de inconformidad de las partes al respecto.

Por su parte, la cuantía de la pensión para 2018 equivale a \$1.435.132, motivo por el que la demandante tiene derecho a **14** mesadas anuales, como quiera que en estas condiciones le fue reconocida y se venía pagando la pensión de vejez al causante, según se desprende de los documentos contenidos en su carpeta administrativa, en especial, la Resolución No. 11644 de 2002 en la que el ISS accedió al reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 7 de abril de 2002 (f. 178 a 180 Archivo 01 ED), esto es, antes de la limitación de mesadas devenida con la expedición del AL 01 de 2005.

Así entonces, efectuada la liquidación del retroactivo<sup>2</sup>, se observa que la suma impuesta en sede de primera instancia por cuenta de mesadas adeudadas entre el 1 de abril de 2018 y el 30 de septiembre de 2021 (\$69.221.551), no afecta el patrimonio de la entidad por cuenta de quien se conoce el asunto en consulta, debiendo confirmarse lo decidido en este punto. A partir del 1 de octubre de 2021, el monto de la mesada asciende a \$1.561.785, la cual se continuará pagando sin perjuicio del incremento anual, siempre que la beneficiaria acredite la condición de estudiante, conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, tal como lo ordenó la falladora de primer grado. Del retroactivo en comento es viable que la entidad efectúe los descuentos con destino al SGSSS según lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, conforme quedó definido en la sentencia estudiada.

Las mensualidades descritas no están afectadas por prescripción, como quiera que la causación del derecho se dio a partir del 18 de marzo de 2018 (f. 16 a 17 Archivo 01 ED), la demandante presentó la reclamación respectiva el 6 de septiembre de 2018, la cual fue resuelta negativamente en la Resolución SUB 270122 del 16 de octubre de 2018, confirmada en las Resoluciones SUB 303744 del 21 de noviembre de 2018 y DIR 20875 del 30 de noviembre de 2018 (f. 65 a 79 Archivo 01 ED), mientras que la demanda originaria del presente proceso fue radicada el 30 de abril de 2019 (f. 8 Archivo 01 ED), de donde emerge que no alcanzó a operar el plazo establecido para la operancia de la figura extintiva.

<sup>2</sup> Cálculo retroactivo:

DESDE	HASTA	VARIACION	MESADAS	MESADA COLPENSIONES	RETROACTIVO
1/04/2018	31/12/2018	0,0318	11,00	\$ 1.435.132	\$ 15.786.452,00
1/01/2019	31/12/2019	0,0380	14,00	\$ 1.480.769	\$ 20.730.768,77
1/01/2020	31/12/2020	0,0161	14,00	\$ 1.537.038	\$ 21.518.537,98
1/01/2021	30/09/2021	0,0562	10,00	\$ 1.561.785	\$ 15.617.847,46
TOTAL RETROACTIVO DE DIFERENCIAS					\$ 75.779.150,16

Luego, en punto a los **intereses moratorios** concedidos en la sentencia consultada, es menester indicar que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, el fondo de pensiones estará en la obligación de reconocer al pensionado, además de la obligación a su cargo, los intereses moratorios vigentes a la fecha en que se efectúe el pago.

Con relación a la fecha a partir de la cual deben concederse tales intereses, por vía Jurisprudencial se tiene establecido que éstos se causan una vez vence el plazo que por ley tiene la entidad de seguridad social para resolver la solicitud del derecho. Así lo señaló la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias SL11750 de 2014, SL13670 de 2016 y SL4985 de 2017.

En el presente asunto, se trata de una pensión de sobreviviente, por lo que de conformidad con el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, **los fondos administradores de pensiones cuentan con un término máximo de dos (2) meses para resolver las solicitudes atinentes a este derecho.**

Ahora bien, es importante anotar que la Jurisprudencia Especializada Laboral ha definido una serie de situaciones excepcionales consideradas como justificantes para exonerar del pago de estos réditos, citándose a manera de ejemplo lo dicho en la Sentencia SL309-2022, a saber:

*“(…) 1. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013); 2. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016); 3. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema. Así se expuso en la sentencia CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018 y CSJ SL4129-2018; 4. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016) y 5. Existe controversia entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tal como se precisó en sentencias CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL 14528-2014. (...)”*

En el *sub-júdice*, la negativa de la entidad a reconocer el derecho se sustentó en la falta de acreditación de la condición de estudiante por parte de la reclamante, misma que, según el análisis efectuado a lo largo de la presente providencia, estaba acreditada con suficiencia para el momento del deceso de su padre (18 de marzo de 2018), coligiéndose que la actitud de la pasiva no se enmarca en las hipótesis reseñadas, compartiendo entonces la Colegiatura la condena impuesta a **COLPENSIONES** relativa al pago de estos réditos.

En ese contexto, teniendo que la demandante elevó el reclamo pensional el 6 de septiembre de 2018 (f. 63 Archivo 01 ED), los intereses en comento se generan a partir del **7 de noviembre de 2018**, día siguiente al vencimiento de los dos (2) meses con que contaba la demandada para reconocer el derecho a la sustitución pensional, liquidados hasta el momento en que esta concurra al pago de las mesadas adeudadas, como lo definió el *A quo*.

Con todo, habrá de confirmarse la decisión de primera instancia. Sin costas en esta instancia por haberse conocido en el grado de consulta.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE**



**PRIMERO: CONFIRMAR** la Sentencia No. 385 del 28 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín.

**SEGUNDO:** Sin **COSTAS** en esta instancia.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados,

  
MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Magistrada

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada